



XV LEGISLATURA

INICIATIVA

La Paz Baja California Sur, a 03 de septiembre del 2019.

DIP. DANIELA VIVIANA RUBIO AVILES

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL PRIMER PERIODO ORDINARIOS DE SESIONES

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA XV LEGISLATURA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Honorable Asamblea:

Los que suscriben, **LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS** , **MILENA PAOLA QUIROGA ROMERO, ESTEBAN OJEDA RAMÍREZ, MARÍA PETRA JUÁREZ MACEDA, MARÍA ROSALBA RODRÍGUEZ LÓPEZ, HUMBERTO ARCE CORDERO, MARCELO ARMENTA, INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MORENA, ASI COMO EL DIPUTADO SIN PARTIDO, HOMERO GONZÁLEZ MEDRANO Y LA DIPUTADA SIN PARTIDO, SOLEDAD SALDAÑA BAÑALEZ**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, artículo 101 fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, someto a consideración de esta Honorable Asamblea ***Iniciativa con proyecto de Decreto en materia de transparencia legislativa, que reforma la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur*** en sus **artículos 47**, fracciones sexta, décimo cuarta y décimo sexta; **artículo 51**, fracciones sexta y séptima; **artículo 55**, inciso b de la fracción décima cuarta; **artículo 76** fracción décimo octava; **artículo 82**,

artículo 85, artículo 88, artículo 96, artículo 193, artículo 208 y artículo 252, derogando los artículos 92 y 93, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La décima quinta legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, inició sus trabajos el pasado primero de septiembre del 2018. Para su organización y funcionamiento los diputados integrantes nos hemos sujetado a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Ésta Ley, aprobada el 4 de diciembre de 1990, establece disposiciones, que reflejaban las características del Sistema Político Mexicano del siglo veinte; autoritario, vertical, y antidemocrático. Estas características se reflejan en el marco normativo del Congreso, en su Ley Reglamentaria, en la cual, aún hoy, persisten prácticas que no fomentan la transparencia ni la rendición de cuentas de este órgano legislativo, de cara a la ciudadanía; prácticas contrarias al sentido de los cambios que vienen presentándose en nuestro país desde el reconocimiento al derecho a la información en 1970, hasta los elementos incorporados a nuestra Constitución General en el año 2000 respecto a la transparencia y el acceso a la información pública. La existencia de las sesiones privadas del Congreso, y el frecuente uso que se ha venido haciendo de las mismas, a fin de tomar acuerdos en torno a temas sensibles en los que la opacidad no ha permitido clarificar el debate y distinguir de manera concluyente las distintas posiciones en juego, hacia la opinión pública local, lo que además han derivado en la percepción de la ciudadanía respecto al Congreso y que a su interior generó hasta problemas de gobernabilidad del órgano legislativo, son el más claro ejemplo, de la permanencia de estas prácticas en la Ley Reglamentaria y los nocivos efectos que provocan.

Mantener la privacidad, por no decir secrecía, de las sesiones del pleno donde se discute el presupuesto del congreso, se revisan los informes del ejercicio del gasto, las destituciones así como el nombramiento de los funcionarios, o el retiro de la inmunidad legislativa hacia algún integrante de algún poder público, en deliberaciones en las que la sociedad no puede conocer detalles, ni

evaluar la congruencia de las y los legisladores con su plataforma, ni tener claridad respecto al sentido que den a su voto, daña la confianza de la sociedad para con el Congreso en detrimento del Parlamento abierto.

En cambio, la apertura y máxima transparencia del funcionamiento de este órgano legislativo, fortalece la cultura de la responsabilidad ciudadana, fomentando la participación de las personas en la “cosa pública” y mejorando en consecuencia los resultados de la práctica de gobierno en beneficio de los ciudadanos.

Con esta convicción y compromiso democrático, es que proponemos transparentar las deliberaciones, votaciones, debates y demás actos de funcionamiento de este Congreso, para armonizarlos con las prácticas de parlamento abierto, que busca promover la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana al interior de los congresos y que además son impulsadas por organizaciones de la sociedad civil mexicana y organismos internacionales.

En la construcción de nuestro modelo republicano, el poder legislativo a través del Congreso, representa el sentir más directo del pueblo, por lo que su actividad debe garantizar ese rol democrático y representativo, imposible de alcanzarlo sin transparentar sus actividades frente a los ciudadanos.

El pueblo debe tener la posibilidad de conocer, lo que los diputados y diputadas en quienes depositaron su confianza, desarrollan como resultado de la responsabilidad para la que fueron electos.

Si el parlamento debe ser vehículo, órgano y expresión de la opinión pública, resultará sencillo que su mecánica interna se vea y esté presidida por los principios y reglas de la máxima publicidad, que en un Estado democrático tiene como fin proporcionar al ciudadano y elector, a través de la discusión parlamentaria el conocimiento de las

posibles alternativas políticas, elemento necesario para el proceso de formación de la voluntad política de los ciudadanos y de su consiguiente decisión electoral .

La publicidad parlamentaria, hace posible el control político de los elegidos por los electores, a través de tres instrumentos 1) la presencia del público en las tribunas previstas para tal efecto 2) la cobertura y posterior difusión de la sesión por parte de los medios de comunicación dando a conocer de las deliberaciones y contenidos de los debates a la sociedad 3) el registro de los debates y la publicación en el diario respectivo.

Si la república es una forma de estado que asegura la publicidad de los actos, no existen motivos para que la representación del pueblo delibere y decida en secreto.

La presente reforma reconoce la preeminencia del interés público que tiene el desempeño de la cámara de diputados, a través de los mecanismos de funcionamiento internos y en un contexto determinado por su misma naturaleza: un recinto público, trabajo con recursos públicos, funcionarios públicos donde interactúan con los representantes de la gente.

Distintas mediciones dan cuenta del deterioro que la credibilidad que las instituciones en nuestro país, tal como la publicada el pasado 18 de octubre por parte de la empresa de consultoría Mitofsky “**México: Confianza en sus instituciones 2018**” midiendo la confianza institucional en una escala del 1 al 10, donde 1 es poca confianza y 10 es mucha confianza, con los siguientes resultados:

Universidades= 7.4; Iglesia= 7.2; Ejercito=7.0; Medios de Comunicación= 6.9; Estaciones de Radio=6.9; Redes Sociales=6.9;

Comisión Nacional de Derechos Humanos=6.7; Instituto Nacional Electoral= 6.5; Empresarios= 6.4; Bancos= 6.3; Cadenas de Televisión=5.9; Suprema Corte de Justicia de la Nación= 5.6; Sindicatos= 5.0; Policía= 4.9; Presidencia= 4.8; Senadores= 4.8; Diputados= 4.6 y Partidos Políticos=4.4

Como se observa, con **4.6** puntos de confianza los diputados son una de las dos instituciones con peores resultados y tal nivel de descrédito en parte es resultado de la falta de transparencia del trabajo legislativo, y de la rendición de cuentas.

Esto es grave para la vida pública de nuestro país y de nuestro estado, ya que los congresos o en general, las instituciones legislativas, ***son el espacio donde convergen los intereses ciudadanos y la toma de decisiones políticas.*** En las sociedades modernas, la democracia representativa permite concretar las demandas sociales en políticas públicas, a través de los procesos de toma de decisiones establecidos en las instituciones legislativas. ***Por lo tanto, estas instituciones son esenciales para el correcto funcionamiento de los gobiernos democráticos y en consecuencia, son las primeras obligadas en cumplir con las disposiciones constitucionales y legales, tanto de las que les permiten funcionar, como de aquellas que las convierten en sujetos obligados en materia de transparencia y rendición de cuentas.***

Por desgracia, ***en nuestro Poder Legislativo las sesiones del pleno que no son públicas se constituyen en procesos percibidos con desconfianza por la ciudadanía, proclives a la construcción de acuerdos contrarios al interés del común de los representados,*** que niegan a la sociedad sudcaliforniana el derecho a la información, al no transparentar las deliberaciones y votaciones de los diputados en los asuntos que competen a todos.

En materia de transparencia llega a presentarse cierta incompatibilidad entre lo establecido en las normas y los aspectos de la práctica

cotidiana. La opacidad suele persistir en materias como las sesiones secretas y privadas de los diputados, el ejercicio del gasto de legisladores, el trabajo en Comisiones Permanentes y la contratación del personal que labora en los congresos.

La transparencia constituye una condición necesaria para lograr la rendición de cuentas, en virtud de que el Poder Legislativo tiene la función de “controlar la acción del poder y a nombre de la sociedad exigir cuentas a las autoridades gubernamentales, y ser sujeto a la rendición de cuentas ante los ciudadanos, ya que un parlamento que solamente se autorregula y autoevalúa, **no rinde cuentas**.”

Finalmente, los aspectos presupuestales internos del propio Congreso, no pueden quedar fuera del escrutinio público mucho menos cuando se trata de la instancia encargada de la revisión, aprobación y modificación del resto de los proyectos presupuestarios, de los demás poderes. Por el contrario: implementar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en favor de la ciudadanía, legitima sus tareas de control constitucional y fortalece su representatividad frente a la sociedad.

En la actualidad, las obligaciones del Poder Legislativo, en materia de transparencia y rendición de cuentas se encuentran establecidas, en el apartado “A”, del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el apartado “B” del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur y en el artículo 246 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

En este marco, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en su apartado “B” establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho de acceder a la información pública, así como al acceso, rectificación, cancelación u oposición y protección de sus datos personales, el cual será garantizado por el Estado en los términos de la Constitución General de la República, esta Constitución y la Ley respectiva. Para proteger el derecho fundamental de acceso a la información, se establecen los siguientes criterios, principios y bases:”

I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad en los términos que fijen las leyes. En la interpretación y aplicación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.”

De igual forma, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Baja California Sur, en su artículo tercero, fracciones primera, segunda y tercera, dispone lo siguiente:

Artículo 3. *Para cumplir con su objeto, esta Ley:*

- I. *Proveerá lo necesario para garantizar que toda persona tenga acceso a la información pública mediante procedimientos informales, sencillos, pronto, eficaces, expeditos y progresivos;*

- II. *Garantizará los mecanismos que permitan transparentar la gestión pública, mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados;*
- III. *Promoverá, fomentará y difundirá la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región del Estado;*

De lo anterior se desprende que las deliberaciones, acuerdos, debates, votaciones y decisiones del Congreso del estado de Baja California Sur, son y deberán ser públicas, ya que así lo mandata el marco jurídico de nuestro estado y así lo demanda la sociedad.

QUE EN ESTE CONGRESO NUNCA MÁS, SE GASTE UN SOLO PESO, SE DÉ UNA SÓLA VOTACIÓN, SE PRESENTE UN DEBATE, O SEA EJERCIDA ALGUNA ATRIBUCIÓN O ACTO DE AUTORIDAD, SIN QUE LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SOCIEDAD SE GARANTICEN

SI DEL PUEBLO EMANA TODO PODER PÚBLICO, QUE ENTONCES TODO ACTO DE PODER PÚBLICO, LE RINDA CUENTAS Y RESULTADOS A NUESTRO PUEBLO.

Por lo anteriormente expuesto es que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

**EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DECRETA:**

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones sexta, décimo cuarta y décimo séptima del artículo 47; se reforman las fracciones sexta y séptima del artículo 51, se reforma **el inciso b** de la fracción decima cuarta del artículo 55; se reforma la fracción décimo octava del **artículo 76, se reforman los artículos 82, 85, 88, 96, 193, 208 y 252;** se derogan los artículos 92 y 93 **de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue:**

ARTÍCULO 47.- Son obligaciones del Secretario:

De la fracción I a la V igual

VI.- Extender por sí o por conducto de la Oficialía Mayor, las actas de las sesiones que se celebren, firmándolas en unión del Presidente, después de ser aprobadas por el Congreso.

De la fracción VII a la XIII igual

XIV.- Hacer que se coleccionen las actas de las sesiones.

De la fracción XV a la XVII igual

ARTÍCULO 51.- Son facultades de la Junta de Gobierno y Coordinación Política

De la fracción I a la V igual

VI.- Proponer al **pleno** la destitución de los funcionarios a que se refiere la fracción anterior, por las causas graves que señale la ley, concediéndoles previamente el derecho de audiencia.

VII.- Proponer al **pleno** la destitución de los funcionarios a que se refiere la Fracción anterior, cuando por causas graves o por el buen funcionamiento del Congreso deba hacerse la remoción y proponer a las personas que deban sustituirlas

De la fracción VIII a la XXIII igual

ARTÍCULO 55.- Será materia de estudio, dictamen y competencia de las distintas comisiones, lo siguiente:

De la fracción I a la XIII igual

XIV.- DE CUENTA Y ADMINISTRACION:

a).- *Dejar igual*

b).- Presentar al **pleno** para su aprobación, dentro de la primera quincena del mes de octubre de cada año, el Presupuesto de las cantidades que se necesiten para cubrir las dietas de los miembros del Congreso, los sueldos de los empleados administrativos del pago de suministros de material y servicios que se requieran para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Congreso, así como el que corresponda a otros gastos, para su análisis, discusión y aprobación, en su caso.

Del inciso c) al m) dejar igual

De la fracción XV a la XXXII dejar igual.

ARTÍCULO 76.- Son obligaciones y atribuciones del Oficial Mayor:

De la fracción I a la XVII dejar igual

XVIII.- Asistir a todas las Sesiones, para atender a la Presidencia y a la Secretaría y darse cuenta cabal del desarrollo de los asuntos que en ellas se traten;

De la fracción XIX a la XXVI dejar igual

ARTÍCULO 82.- La legislatura en turno, a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política nombrará al Director o Directora del Instituto de Estudios Legislativos, para lo cual deberá acreditar los siguientes requisitos:

De las fracción I a la IV igual

....

ARTÍCULO 85.- Las Sesiones serán: Ordinarias y Extraordinarias; Solemnes y Permanentes. **Todas las sesiones serán públicas permitiéndose el acceso del público al Recinto Oficial.**

ARTÍCULO 88.- Serán Sesiones Ordinarias las que se celebren durante los Períodos Constitucionales y se llevaran a cabo los días martes y jueves, con excepción de los días de festividad Nacional, Estatal y los que disponga el Congreso.

Dichas Sesiones se iniciarán por regla general a las once horas y durarán hasta cuatro horas, pudiendo ser prorrogadas por disposición del Presidente del Congreso o por iniciativa de algunos de los Diputados y en los términos de esta Ley.

ARTICULO 92.- Se deroga..

ARTÍCULO 93.- Se deroga.

ARTÍCULO 96.- Será Sesión Permanente la Sesión Ordinaria, o Extraordinaria, que así sea declarada en votación nominal por la mayoría de los Diputados para agotar el o los asuntos para los que fueron convocados.

Durante la Sesión Permanente no podrá darse cuenta de ningún otro asunto, que no esté comprendido en el acuerdo respectivo y si se presentara alguno, con el carácter de urgente, el Presidente someterá a votación, si es de conocerse.

ARTICULO 193.- Interpuesta una denuncia, querella, requerimiento del Ministerio Público o acusación ante el Congreso del Estado para instruir el Procedimiento relativo al Juicio Político o para la Declaración de Procedencia a la que se refiere el Título II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur, se discutirá y dictaminará en Sesión **expresamente citada para tal efecto**, turnándose el asunto si procediere a la Comisión Instructora en los términos del Artículo 12 de la Ley de Responsabilidades.

De considerarse necesario por la asamblea, podrá nombrarse una comisión especial integrada por tres Diputados, que dentro del término de tres días dictaminará si ha lugar o no a iniciar los procedimientos de Juicio Político o de declaración de procedencia. Este dictamen recibirá una sola lectura y se pondrá de inmediato a discusión.

ARTÍCULO 208.- Los dictámenes que la Comisión Instructora emita durante los incidentes se tomarán en consideración y discutirán en la sesión **convocada en los términos del artículo 193.**

ARTÍCULO 252.- El ejercicio del derecho a la información pública sólo estará restringido mediante la figura de la información reservada, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Estado de Baja California Sur. Para su clasificación, administración, resguardo, conservación y preservación se observará lo dispuesto en el mismo ordenamiento, sin demérito de que la misma deberá aprobarse por el pleno del Congreso.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente decreto será publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, y entrará en vigor el día de su publicación.

Atentamente.

Dado en el salón de sesiones “José María Morelos y Pavón a los tres días del mes de septiembre del 2019.

Dip. María Petra Juárez Maceda

Dip. Milena Paola Quiroga Romero

Dip. Rosalba Rodríguez López

Dip. Humberto Arce Cordero

Dip. Esteban Ojeda Ramírez

Dip. Marcelo Armenta

Dip. Homero González Medrano

Dip. Soledad Saldaña Bañalez